

PREGUNTAS CASTELLANO:

1. Según el art. 25 a) 2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la cual se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/ UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 cuál de los siguientes contratos celebrados por la Administración Pública tiene el carácter de privado:

a. Suscripción de revistas, publicaciones periódicas y bases de datos.

b. Adquisición de suministros.

c. Colaboración entre el sector público y el sector privado.

d. La concesión de servicios públicos.

2. En relación a la formalización del contrato, el art. 37 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la cual se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/ UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, ¿las entidades del sector público pueden contratar verbalmente?

a. No, en ningún caso.

b. Solo cuando se trate de contratos menores.

c. Solo cuando el contrato tenga carácter de emergencia.

d. Solo cuando contrate una Administración Local.

3. Cuando solo se utilice un criterio para la adjudicación de un contrato, el art. 146. 1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la cual se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/ UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, establece que este tiene que relacionarse necesariamente con:

a. La calidad.

b. El plazo de ejecución o entrega de la prestación.

c. Los costes.

d. La nacionalidad del contratista.

4. Según el art. 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la cual se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/ UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, los contratos que tienen por objeto la adquisición o el arrendamiento de productos o bienes muebles son:

a. Contratos de servicios.

b. Contratos de obras.

c. Contratos de suministro.

d. Ninguna de las respuestas es válida.

5. Según el art. 29.8 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la cual se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/ UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, los contratos menores:

a. No podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.

b. No podrán tener una duración superior a dos años ni ser objeto de prórroga.

c. No podrán tener una duración superior a un año incluida la prórroga.

d. No podrán tener una duración superior a cinco años.

6. Según el art. 59.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la cual se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/ UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, contra la resolución de los recursos especiales en materia de contratación:

a. Solo cabrá la interposición del recurso de alzada.

b. Solo cabrá la interposición del recurso contencioso-administrativo.

c. Solo cabrá la interposición de recurso de casación.

d. No cabe ningún otro recurso.

7. Según el art. 50.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la cual se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/ UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el procedimiento del recurso especial en materia de contratación se iniciará mediante escrito que se tendrá que presentar en el plazo de:

a. 5 días hábiles

b. 15 días hábiles

c. 15 días naturales

d. 1 mes

8. Según el art. 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la cual se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/ UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, no podrán ser objeto de los contratos de servicios:

a. Los que impliquen el desarrollo o mantenimiento de aplicaciones informáticas.

b. Los que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos.

c. Los que tengan por objeto la prestación de actividades docentes.

d. Los que tengan por objeto el suministro de armamento para la Policía Local.

9. Según el art. 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la cual se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/ UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, no se consideran contratos de suministro:

a. Aquellos contratos en que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por precio unitario sin que la cuantía total se defina con exactitud al tiempo de celebrar el contrato, por estar subordinadas las entregas a las necesidades del adquirente.

b. Los que tengan por objeto la adquisición y arrendamiento de equipos y sistemas de telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas y la cesión del derecho de uso de estos últimos.

c. Los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida.

d. Los contratos de adquisición de señales de tráfico.

10. Según el art. 29.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la cual se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/ UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, los contratos de suministro y de servicios de prestación sucesiva tendrán un plazo máximo de duración de:

a. Tres años, incluyendo las posibles prórrogas.

b. Cinco años, incluyendo las posibles prórrogas.

c. Cinco años, sin incluir las posibles prórrogas.

d. Veinte años.

11. Quedan excluidos, según los artículos 7 y 11, del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la cual se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/ UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

a. La relación de servicio de los funcionarios públicos y los contratos que regula la legislación laboral quedan excluidos del ámbito de esta Ley.

b. Los contratos relativos a servicios de arbitraje y conciliación.

c. Los acuerdos que celebre el Estado con otros Estados o con otros sujetos de derecho internacional.

d. Todas las respuestas anteriores son correctas.

12. Según el artículo 189 de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, Municipal y de Régimen Local de las Illes Balears, el personal al servicio de las entidades locales de las Illes Balears se clasifica en:

a. Personal funcionario de carrera, personal funcionario interino y personal laboral.

b. Personal funcionario y personal laboral.

c. Personal funcionario de carrera, personal funcionario interino, personal laboral fijo, personal laboral temporal y personal eventual.

d. Personal fijo y personal eventual.

13. Según el artículo 92.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el ejercicio de las funciones públicas que impliquen ejercicio de autoridad corresponde exclusivamente a:

a. Personal eventual.

b. Personal laboral fijo.

c. Funcionarios de carrera.

d. Ninguna de las respuestas es correcta.

14. La plantilla, que comprende todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, se aprueba anualmente por cada Corporación Local, según el artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, a través de:

a. Un acuerdo de Junta de Gobierno.

b. De la relación de puestos de trabajo.

c. Una ordenanza municipal.

d. Del presupuesto.

15. El artículo 10.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que la selección de funcionarios interinos debe hacerse mediante procedimientos ágiles que han de respetar en todo caso los principios:

- a. De igualdad, mérito y capacidad.
- b. De igualdad, mérito, capacidad y publicidad.**
- c. De publicidad.
- d. De igualdad y capacidad.

16. Las retribuciones de los funcionarios de carrera se clasifican, según el artículo. 22.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en:

- a. Básicas y extraordinarias.
- b. Básicas y complementarias.**
- C. Básicas y participaciones.
- d. Ninguna de las respuestas es correcta.

17. De acuerdo con el artículo. 15 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, de los que se enumeran a continuación cuales son los derechos individuales de los empleados públicos que se ejercen de forma colectiva:

- a. A la libertad sindical.
- b. A la negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo.
- c. Al planteamiento de conflictos colectivos de trabajo, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso.
- d. Todas las respuestas anteriores son correctas.**

18. De acuerdo con el artículo. 54 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación a las lenguas oficiales de cada territorio, prevé que es un deber de los empleados públicos:

- a. Promover el uso de la lengua oficial del Estado español.
- b. Promover el uso de las diversas lenguas del Estado español.
- c. Conocer las lenguas oficiales de las diversas autonomías.
- d. Garantizar la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite, siempre que sea oficial en el territorio.**

19. El artículo 39 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que los órganos específicos de representación de los funcionarios son:

- a. Los Comités de Personal y Delegados de Servicio.
- b. Los Delegados de Personal y las Juntas de Personal.**
- c. Los representantes sindicales.
- d. Los Delegados de Prevención.

20. Según el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ¿cuando se entienden practicadas las notificaciones por medios electrónicos?:

- a. Una vez transcurridos diez días desde el acceso a su contenido.
- b. Cuando hayan transcurrido tres días desde la puesta a disposición en la sede electrónica.
- c. En el momento en que se produzca el acceso a su contenido.**
- d. En el momento en que la Administración la ponga a disposición en la sede electrónica.

21. Indicar cuál de las afirmaciones siguientes es correcta, según el artículo 70.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:

- a. Los expedientes pueden tener formato electrónico.
- b. Tiene que constar en el expediente en formato electrónico una copia electrónica certificada de la resolución adoptada.**
- c. En los expedientes electrónicos no es necesario incluir un índice numerado de los documentos que contenga cuando se remita.
- d. Tienen que constar en el expediente sólo los informes y notificaciones.

22. Estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, según el art. 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:

- a. Las personas físicas.
- b. Las personas jurídicas.**
- c. Las personas que representen una persona física.
- d. Las personas mayores de 20 años.

23. ¿De acuerdo con el art. 116 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común, ¿cuáles son causas de inadmisión del recurso?

- a. El recurrente no está legitimado para interponerlo.
- b. El acto administrativo no es susceptible de recurso.
- c. El plazo para la interposición ya ha transcurrido.
- d. Todas las causas son ciertas.**

24. De acuerdo con el art. 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común, ¿ante quién se puede interponer el recurso de alzada?

- a. Ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el órgano competente para resolverlo.**
- b. Únicamente ante el órgano que dictó el acto que se impugna.
- c. Únicamente ante el órgano competente para resolverlo.
- d. Ninguna respuesta es correcta.

25. De acuerdo con el art. 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común, el plazo para interponer un recurso potestativo de reposición si el acto es expreso es

a. De 15 días naturales.

b. De un mes.

c. De 30 días hábiles.

d. De 3 meses

26. De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el sector público comprende:

a. La Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas, las entidades que integran la Administración local y los organismos públicos y las entidades de derecho público vinculados o dependientes de las administraciones públicas.

b. La Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas, las entidades que integran la Administración local y el sector público institucional.

c. La Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas, las entidades que integran la Administración local y las universidades.

d. La Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas, las entidades que integran la Administración local y determinados ente del sector público.

27. De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, los interesados podrán firmar:

a. A través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de su consentimiento, así como la integridad y la veracidad del documento.

b. A través de cualquier medio por escrito que permita acreditar la autenticidad de su voluntad, así como la integridad y la inalterabilidad del documento.

c. A través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad y la inalterabilidad del documento.

d. A través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad, así como la integridad, la inalterabilidad y la veracidad del documento.

28. De acuerdo con el art. 117.1 de la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas la interposición de cualquier recurso:

a. Suspenderá siempre la ejecución del acto impugnado.

b. Suspenderá la ejecución del acto impugnado, menos cuando una disposición establezca el contrario.

c. No suspenderá la ejecución del acto impugnado, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario.

d. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

29. El recurso de revisión, según el art. 113 de la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas es:

a. Ordinario.

b. Especial.

c. Extraordinario.

d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

30. Los actos administrativos que ponen fin a la vía administrativa, según el art. 123 de la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, pueden ser recurridos:

a. En alzada.

b. Potestativamente en reposición.

c. En alzada y potestativamente en reposición.

d. Ninguna respuesta es correcta.

31. De acuerdo con el art. 3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el ámbito de aplicación de esta ley:

a. Sólo es de aplicación al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas.

b. Es aplicable tanto en el ámbito de las relaciones laborales reguladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, como en el de las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

c. No es de aplicación al personal al servicio de las Administraciones Públicas.

d. No resulta de aplicación al personal funcionario de las Administraciones Públicas.

32. Cuál es la definición de “riesgo laboral” según el artículo 4.2º de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales:

a. Es el foco de emisión de gases y vapores.

b. Es la casualidad que una persona trabajadora padezca un accidente.

c. Es la gravedad de un daño a la salud.

d. Es la posibilidad que un trabajador padezca un determinado daño derivado del trabajo.

33. De acuerdo con el artículo 18 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario debe adoptar las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias con relación a:

a. Los derechos laborales que les corresponden.

b. Las obligaciones en referencia a la prevención de riesgos laborales.

c. Los riesgos, las medidas y las actividades de protección y prevención y las medidas adoptadas.

d. El empresario no tiene ninguna obligación de informar a los trabajadores.

34. Cuál de las siguientes no es una competencia de los delegados de prevención, de acuerdo con las competencias y facultades recogidas en el artículo 36 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales:

a. Ejercer una tarea de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

b. Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

c. Informar a la autoridad laboral sobre los accidentes de trabajo.

d. Colaborar con la dirección de la empresa en la mejor de la acción preventiva.

35. En relación a los Delegados de Prevención, según el artículo 35 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales:

a. Son elegidos en las elecciones sindicales.

- b. **Son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo.**
- c. Son las personas que llevan a cabo las evaluaciones de riesgos laborales.
- d. Los elige el empresario entre los representantes sindicales.

36. Con relación a la situación de embarazo de una trabajadora, el artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales:

- a. Suprime el trabajo nocturno si la trabajadora es mayor de 40 años.
- b. Prohíbe el trabajo nocturno.
- c. **Prevé la no realización del trabajo nocturno cuando sea necesario.**
- d. No hace ninguna alusión al trabajo nocturno en esta situación.

37. Definición de “equipo de trabajo” según el artículo 4.6º de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales:

- a. **Es cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo.**
- b. Es todo aparato con el cual se lleva a cabo el trabajo diario.
- c. Es todo sistema con el cual se desarrolla el trabajo diario.
- d. Son las instalaciones de los centros de trabajo.

38. La formación, en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, de acuerdo con el artículo 19.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales:

- a. La formación deberá hacerla el trabajador obligatoriamente y costearla él mismo.
- b. **La formación se podrá impartir por la empresa mediante medios propios o concertándola con servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores.**
- c. La formación sólo la podrá impartir la empresa con medios propios.
- d. El trabajador podrá realizar la formación con medios propios.

39. De acuerdo con el artículo 39 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado para:

- a. Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas.
- b. Conocer cuántos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del servicio de prevención, en su caso.
- c. Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de prevención.
- d. **Todas las anteriores son correctas.**

40. De acuerdo con el art. 3.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, esta no será de aplicación en aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito de las funciones públicas de:

- a. Policía, seguridad y resguardo aduanero.

- b. Servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública.
- c. Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil.
- d. **Todas las respuestas son correctas.**

41. El artículo. 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, establece la obligación general del deber de confidencialidad de los responsables y encargados del tratamiento de datos y de las personas que intervienen en cualquier fase y este deber de confidencialidad se mantiene:

- a. Durante 5 años.
- b. **Se mantendrán aun cuando hubiese finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento.**
- c. Sólo se mantienen hasta que finaliza la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento de datos.
- d. Ninguna de las respuestas es correcta.

42. La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, tiene por objeto garantizar los derechos digitales de la ciudadanía de conformidad con el mandato:

- a. Del art. 14 de la Constitución Española.
- b. Del art. 131 de la Constitución Española.
- c. Del art. 1 de la Constitución Española.
- d. **Del art. 18.4 de la Constitución Española.**

43. De acuerdo con el art. 7.1 de la La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, el tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea:

- a. **Mayor de 14 años.**
- b. Mayor de 12 años.
- c. Mayor de 16 años.
- d. Menor de 2 años.

44. En relación con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, los datos relativos a las personas jurídicas:

- a. Se les aplicará también esta ley.
- b. Se les aplicará sólo algunos artículos.
- c. **No tienen la consideración de datos de carácter personal y, por tanto, no se les aplicará esta ley.**
- d. Ninguna de las respuestas es correcta.

45. El art. 44.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, establece que la Agencia Española de Protección de Datos:

- a. **Tiene personalidad jurídica propia.**
- b. Tiene plena capacidad pública, pero no privada.
- c. Es un ente de derecho privado.
- d. No actúa con independencia de los poderes públicos.

46. Según el art. 22.3 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, respecto al tratamiento de imágenes con finalidad de video vigilancia, ¿cuál es el plazo máximo de conservación de los datos cuando no tengan que ser conservados para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones?

- a. Dos años.
- b. Dos meses.
- c. Seis meses.
- d. **Un mes.**

47. ¿Cuáles son los derechos que contempla la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, en el capítulo II del título III?

- a) Derecho de acceso.
- b) Derecho de rectificación.
- c) Derecho de supresión.
- d) **Contempla los tres derechos, entre otros.**

48. Según el art. 48.3 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, la presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos será nombrado por el:

- a. Ministerio de Justicia.
- b. Ministerio de Justicia a propuesta del Gobierno.
- c. **Gobierno a propuesta del Ministerio de Justicia.**
- d. Presidente del Parlamento.

49. Según el art. 6.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, se entiende por consentimiento del afectado:

- a. **Toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen.**
- b. Toda manifestación de voluntad, mediante una declaración.
- c. Toda manifestación de voluntad por la que se acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen.
- d. Cualquier manifestación a pesar de que no haya recibido toda la información necesaria.

50. Qué artículo de la Constitución Española proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo:

- a. Art. 134
- b. Art. 14**
- c. Art. 36
- d. La Constitución Española no proclama este derecho.

51. En la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, por la igualdad efectiva de mujeres y hombres estatal, se establecen medidas específicas sobre los procesos de selección y para la provisión de puestos de trabajo esta proyección de la igualdad ¿afecta también a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad y a las Fuerzas Armadas?

- a. Si**
- b. No
- c. Sólo afecta a las Fuerzas Armadas.
- d. Sólo afecta a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

52. De acuerdo con el art. 2 que regula el ámbito de aplicación de la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres de las Islas Baleares, esta ley es aplicable a:

- a) Todas las Administraciones Públicas de las Islas Baleares y al resto de poderes públicos y también a las personas físicas y jurídicas.**
- b) Sólo a las Administraciones Locales de las Islas Baleares.
- c) Sólo a los Consells Insulars y a las Administraciones locales de las Islas Baleares.
- d) Sólo a los entes públicos dependientes o vinculados a la Administración Pública.

53. En el título Preliminar de la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de hombre y mujeres de las Islas Baleares, se establece que esta igualdad se consagra como principio fundamental de la Unión Europea desde la entrada en vigor:

- a. Del Tratado de Ámsterdam de 1 de mayo de 1999**
- b. De la Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo.
- c. De la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
- d. De la Directiva 96/97/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 1996.

54. De acuerdo con el art. 24 de la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres de las Islas Baleares, se establecerá como medida para mejorar la integración de la perspectiva de género que, a través de los órganos de contratación, deben establecerse condiciones especiales en referencia a la ejecución de los contratos que se formalicen y los órganos de contratación de las administraciones públicas deben establecerlo en:

- a. En las ordenanzas fiscales.
- b. En los pliegos de cláusulas administrativas particulares.**
- c. En la web municipal.
- d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

55. Según el art. 25.1 de la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres de las Islas Baleares, qué medidas han de adoptar las Administraciones Públicas de las Islas Baleares:

- a. Adoptarán las medidas necesarias para asegurar a su personal una formación básica, progresiva y permanente en materia de igualdad de mujeres y hombres.
- b. Incorporarán la perspectiva de género a los contenidos y a la formación con la finalidad de hacer efectivas las disposiciones de esta ley.
- c. Garantizar un conocimiento práctico suficiente que permita la integración efectiva de la perspectiva de género en la actuación administrativa, con una mención especial de los cursos sobre el uso no sexista del lenguaje administrativo.
- d. Deben adoptar todas estas medidas.**

56. En el art. 25.4 de la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres de las Islas Baleares, se regula que en los temarios de los procesos de selección para el acceso a la función pública, las administraciones públicas de las Illes Balears:

- a. Es opcional incluir contenidos relativos a la legislación de igualdad de mujeres y hombres y su aplicación a la actividad administrativa.
- b. Incluirán contenidos relativos a la legislación de igualdad de mujeres y hombres y su aplicación a la actividad administrativa.**
- c. Sólo pueden incluir contenidos relativos a la legislación de igualdad entre mujeres y hombres pero no contenidos relativos a su aplicación.
- d. No está regulada ninguna cuestión relativa a la igualdad en los temarios de los procesos de selección.

57. Según el art. 22.1 de la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres de las Islas Baleares, la institución que debe velar especialmente para que las administraciones públicas cumplan las previsiones que establece esta ley es:

- a. La Delegación del Gobierno de las Islas Baleares.
- b. La Presidencia del Parlamento de las Islas Baleares.
- c. La Sindicatura de Greuges.**
- d. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

58. De acuerdo con el art. 4 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico y como tal:

- a. Se tiene que integrar y observar en la aplicación de las normas jurídicas
- b. Se puede integrar y observar en la interpretación y la aplicación de las normas jurídicas.
- c. Se tiene que integrar y observar en la interpretación y la aplicación de las normas jurídicas.**
- d. Se tiene que integrar y observar en la interpretación y la aplicación de las sentencias.

59. Indicar la respuesta correcta en relación con las acciones positivas que establece el art. 11 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres:

- a. Los poderes públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres.
- b. Las medidas tienen que aplicarse mientras subsistan las situaciones patentes de desigualdad.
- c. Las medidas tienen que ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso.
- d. Todas las respuestas son correctas.**

60. ¿Cuál de estos principios generales que tienen que regir las actuaciones de los poderes públicos de las Islas Baleares para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres no está recogido en el art. 3 de la Ley 11/2016, del 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres?

- a) La adopción de las medidas necesarias para hacer un uso no sexista del lenguaje y, en todo caso, para evitar la invisibilidad de las mujeres a través del lenguaje.
- b) La incorporación del principio de igualdad de género, el respeto hacia la diversidad afectiva y sexual y la coeducación al sistema educativo de las Islas Baleares.
- c) La protección especial del derecho a la igualdad de trato de personas del colectivo LGTBI.**
- d) La corresponsabilidad a raíz del reparto equilibrado entre mujeres y hombres de las responsabilidades familiares, las tareas domésticas y la atención de las personas en situación de dependencia.

PREGUNTAS DE RESERVA

1. Según el artículo 63.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, los procedimientos de naturaleza sancionadora:

- a) Se inician de oficio o a instancia de parte.
- b) Se inician siempre de oficio por acuerdo del órgano competente.**
- c) Se inician a instancia de parte.
- d) Se inician de oficio previa denuncia.

2.Cuál de las siguientes situaciones no es una situación administrativa de los funcionarios de carrera de acuerdo con el artículo 85 del Real decreto legislativo 572015 de 30 de octubre, por el cual se aprobó el texto refundido de la Ley del Estatuto básico de los empleados públicos.

- a. Excedencia.
- b. Servicio activo.
- c. Servicios especiales.
- d. Expectativa de destino**

3. El órgano que resuelve el recurso potestativo de reposición según el artículo. 123.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:

- a. El superior jerárquico del órgano que dictó el acto administrativo que se impugna.
- b. El mismo órgano que dictó el acto administrativo que se impugna.**
- c. El Alcalde del Ayuntamiento, en todo caso.
- d. Indistintamente, el mismo órgano que dictó el acto impugnado, o el órgano superior

4. Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, los interesados tienen derecho a no aportar al procedimiento:

- a) Aquellos documentos que los sean perjudiciales.
- b) Aquellos documentos que ya se encuentran en poder de la Administración actuante o que hayan**

sido elaborados por una administración.

c) Aquellos documentos que tienen la condición de documentos públicos.

d) Aquellos documentos de los cuales no disponen en el plazo del requerimiento

5. De acuerdo con el artículo. 29 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, cuales de las siguientes son obligaciones en particular del trabajador:

a). Utilicen adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, los aparatos, las herramientas, las sustancias peligrosas, los equipos de transporte y, en general, cualquier otro medio con el cual lleven a cabo su actividad.

b). Cooperen con el empresario porque este pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y que no comporten riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

c) Informen inmediatamente su superior jerárquico directo y los trabajadores designados para llevar a cabo actividades de protección y prevención o, si procede, el servicio de prevención, sobre cualquier situación que, a su parecer, comporte, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.

d) Todas estas son obligaciones en particular del trabajador, entre otros.

6. ¿Cuántos días de permiso por matrimonio otorga en la actualidad el Estatuto básico del empleado público, según el arte. 48.I?

a) 15 días.

b) 2 semanas.

c) 25 días.

d) Los que quiera otorgar la Administración en cada caso.

7. Son causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera de acuerdo con el arte. 63 del Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto básico del empleado público:

a. La renuncia a la condición de funcionario.

b. La pérdida de la nacionalidad.

c. La jubilación total del funcionario.

d. Todas estas son causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera, entre otros.

8 En relación con el cómputo de plazos, el arte. 30.2 de la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, establece que siempre que por ley o en el derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días:

a. Se entiende que estos son hábiles, y se excluyen del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.

b. Se entiende que estos son hábiles, y se incluyen al cómputo los sábados, los domingos y los

declarados festivos.

c. Se entiende que estos son días naturales.

d. Se entiende que estos son días naturales y se excluyen del cómputo los sábados, los domingos.

9. De acuerdo con el artículo 34 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014 /24 /UE, de 26 de febrero de 2014, en los contratos del sector público pueden incluirse cualesquiera pactos, cláusulas y condiciones, siempre que:

a) Sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración.

b) No sean contrarios a los principios de confidencialidad.

c) No sean contrarios al interés público, ordenamiento jurídico y principios de buena administración.

d) Ninguna de las respuestas es correcta.

10. De acuerdo con el artículo 36.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014 /24 /UE, de 26 de febrero de 2014, salvo que sobre cláusulas indiquen otra cosa, los contratos del sector público se entienden suscritos:

a) En el lugar donde se encuentra la sede del contratista.

b) En el lugar donde se realiza la ejecución del contrato.

c) En el lugar donde se encuentra la sede del órgano de contratación.

d) En el lugar donde designen las partes.